

En Logroño, a 29 de enero de 2021, el Consejo Consultivo de La Rioja, constituido telemáticamente (al amparo del art. 17.1 de la Ley 40/2015), con asistencia de su Presidente, D. Joaquín Espert Pérez-Caballero, y de los Consejeros, D. José María Cid Monreal, D. Enrique de la Iglesia Palacios, D. Pedro Prusén de Blas y D^a Amelia Pascual Medrano, así como del Letrado-Secretario General, D. Ignacio Granado Hijelmo, y siendo ponente D. José M^a Cid Monreal, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

6/21

Correspondiente a la consulta formulada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en relación con la *Revisión de oficio núm. 65/2020 de los actos administrativos señalados en el apartado 12º de la 2ª Propuesta de resolución, de 13 de enero de 2021, por los que se autorizó, a D^a T.G.F., a plantar 0,3447 Has de nuevos viñedos en 2016.*

ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja ha remitido la consulta expresada sobre el precitado procedimiento de Revisión de oficio núm. 65/2020. Del expediente que nos ha sido remitido, resultan los siguientes datos de interés.

1. Antecedentes relativos al procedimiento de autorización de nuevas plantaciones del año 2016.

A) El 9 de marzo de 2016, la persona interesada presentó solicitud de participación en el procedimiento de reparto de nuevas plantaciones 2016, interesándole fueran admitidas a reparto un total de 2,9742 Has.

La solicitud se formuló al amparo del nuevo régimen jurídico que, para las nuevas plantaciones, establece el Reglamento 1308/2013, de 17 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, para el periodo 2016-2030; y sus normas de desarrollo, como el Reglamento Delegado 560/2015, de 15 de diciembre de 2014, de la Comisión; el

Reglamento de Ejecución 561/2015, de 7 de abril; y -en el ámbito del Derecho interno español-el RD 740/2015, de 31 de julio, por el que se regula el control del potencial vitícola.

Con la solicitud, la persona interesada pretendía que se le adjudicara una autorización de nueva plantación de viñedo de las contempladas en el art. 64 del Reglamento 1308/2013, así como en los arts. 6 y ss. del RD 740/2015.

En el formulario-tipo que está anexo a las solicitudes firmadas por la persona interesada (formulario titulado: *Solicitud de autorización de nuevas plantaciones de viñedo – OCM 1308/2013 – Campaña Vitícola*), ésta marcó la casilla del apartado “G”, relativo a los *criterios de prioridad*, que suponía que la misma pretendía ser encuadrada dentro del *Grupo 1* de los *criterios de prioridad* establecidos por el RD 740/2015.

B) El 2 de mayo de 2016, el Servicio de Viñedo emitió la Propuesta de resolución, en el sentido de reconocer, a la persona interesada, como perteneciente al *Grupo 1* de reparto y reconocerle como válida a efectos de reparto 0,3593 Has de las 2,9742 Has solicitadas. Frente a dicha Propuesta de Resolución la interesada formuló Alegaciones en fecha 11 de mayo de 2016.

C) El 7 de julio de 2016, el Director General de Desarrollo Rural dictó la Resolución núm. 700, por la que, una vez aplicado el porcentaje de prorrata sobre los Recintos declarados admisibles, se confirió, a la persona interesada, una autorización administrativa para plantar una superficie total de 0,3447 Has (siendo la superficie declarada admisible la de 2,9742 Has).

Esa Resolución informó de que su efectividad estaba condicionada “*a la verificación de la admisibilidad de los Recintos solicitados, mediante su cruce con el resto de las solicitudes de pago único (PAC) y Registros de la Consejería (actuante)*”; debiendo, además, la persona interesada “*indicar la localización concreta de la/s Parcela/s en la cual va a realizar la plantación*”.

La Resolución razonó que esa es la superficie autorizada porque supone, respecto de la declarada admisible (1,6286 Has), un porcentaje del 11,59131781 %, que es, a su vez, el que representa la superficie máxima a plantar autorizada por el Ministerio de Agricultura en la DOCR (387 Has, según Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, BOE del 30), respecto de la superficie total solicitada, en ese mismo ámbito de la DOCR, por todos los peticionarios de nuevas autorizaciones de plantación de viñedos, en 2016.

D) El 20 de julio de 2016, la persona interesada comunica la localización concreta de las Parcelas a plantar, identificando la Parcela A, del Polígono X, de Alesón, como

destinataria de la plantación autorizada, en una superficie de 0,2892 Has y la Parcela B en una superficie de 0,0555 Has.

E) En fecha 4 de noviembre de 2016, El Director General de Desarrollo Rural dicta Resolución autorizando la plantación en los términos solicitados

F) El 30 de mayo de 2018, la persona interesada comunicó haber concluido los trabajos de la plantación en las referidas Parcelas, aportando facturas emitidas por la empresa viverista.

G) Consta también en el expediente un informe de campo del Servicio de Viñedo, de 18 de julio de 2018, sendos informes técnicos sobre las Parcelas vitícolas, de 1 de agosto de 2018, así como solicitudes de autorización de viñedo y de inscripción en el Registro del Consejo Regulador. En los informes, se verifica que la plantación efectuada está dentro de los márgenes permitidos de tolerancia.

H) En el Registro de Viñedo, constan sendas inscripciones con el siguiente detalle: i) inscripción, de fecha 8 de agosto de 2018, por una superficie de 0,2768 Has, en Alesón (010), Polígono X, Parcela A, Recinto aa; y Parcela A, Recinto bb; por una superficie de 0,0179 Has, en total 0,2947 Has; y ii) inscripción, de 14 de noviembre de 2018, en Alesón (010), Polígono X, Parcela B, Recinto bb. por una superficie de 0,0341 Has: y Parcela B, Recinto cc, por una superficie de 0,0159 Has; en total, 0,0500Has.

2. Antecedentes relativos al procedimiento de autorización de nuevas plantaciones del año 2017.

A) Respecto del procedimiento de nuevas plantaciones 2017, consta que, ante la solicitud realizada por la persona interesada, en fecha 21 de abril de 2017, el Jefe de Servicio de Viñedo resuelve encuadrar la solicitud en el *Grupo 2*, por lo que, mediante Resolución del Director General de Desarrollo Rural de fecha 3 de julio de 2017, se denegó la concesión de nuevas plantaciones para la campaña de 2017.

B) Contra dicha Resolución no consta que la persona interesada formulase recurso alguno.

3. Actuaciones administrativas previas a la iniciación del procedimiento de revisión de oficio.

A) Con posterioridad, la Consejería actuante contrastó los datos afirmados en las solicitudes que la persona interesada había presentado en el año 2016 (tanto los datos atinentes a sus condiciones personales y a su explotación agraria, como los referentes a las Parcelas que fueron consideradas admisibles), con los datos obrantes en el Registro de

Explotaciones Agrarias (REA), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

B) La misma Consejería también consultó los datos relativos a la explotación agraria de la persona interesada y de otras relacionadas con ella, analizando un conjunto de circunstancias atinentes a: i) la evolución de la explotación desde 2016 hasta la actualidad; ii) los datos generales de la explotación (edad de la persona titular, formación, licencia para la aplicación de productos fitosanitarios, maquinaria inscrita a su nombre, seguros agrarios suscritos, cuadernos de explotación cumplimentados); iii) el régimen de tenencia de las Parcelas que presenta como admisibles y explotaciones de procedencia de las Parcelas o Recintos de la explotación; y iv) aportación, o no, del Cuaderno de explotación (CUEX).

Sobre la base de esos datos, que figuran pormenorizadamente detallados en los folios 63 a 103 del expediente, existe un informe de Recomendaciones finales, de fecha 8 de mayo de 2020 (fols. 104-107) del que, resumidamente, se desprenden las siguientes circunstancias:

-En año 2016:

-La explotación figura con superficies, por primera vez, en el REA en el año 2016, en el que realiza un REGIPA de fecha 09/03/2016, informatizado el 30/06/2016; y declara 2,94 Has, de las que: 1,62 Has, son de trigo; y 1,32 Has, de barbecho tradicional.

-La mayoría de las Parcelas que declara, las declaró en años anteriores el cónyuge de la persona solicitante.

-En año 2017:

-La persona solicitante presenta 2 REGIPAS: i) uno, en fecha 07/03/2017, en el que declara 5,27 Ha, de las que: 3,70 Has son de cebada; 1,07 Has, de barbecho tradicional; 0,43 Has, de trigo; y 0,07 Has, de olivar; y ii) otro, de fecha 29/05/2017, en el que declara 3,97 Has, de las que: 3,08 Has son de cebada; 0,82 Has, de barbecho tradicional; y 0,07 Has, de olivar.

-La persona interesada declara las Parcelas del año anterior, y las nuevas que declara este año no las declaró nadie en años anteriores.

-Junto a la solicitud de nuevas plantaciones, la persona interesada presentó diversos contratos de arrendamiento: i) en uno de ellos, el arrendador tiene 86 años, figura en el REA desde el año 1999 y con viñedo desde el 2004; y ii) en otro, es arrendador el cónyuge de la persona solicitante, el cual figura en el REA desde el año 1998 y con viñedo desde el 2004, dispone de carné cualificado de aplicador de productos fitosanitarios, su explotación es prioritaria desde el 2016 y cuenta con maquinaria inscrita en el Registro oficial correspondiente (ROMA).

-En año 2018:

-La persona solicitante, en fecha 03/05/2018 realiza un REGEPA, en el que declara 3,89 Has, de las que: 1,85 Has son de trigo; 1,65 Has, de barbecho tradicional; 0,32 Has, de viñedo; y 0,07 Has, de olivar.

-La persona solicitante declara todas las Parcelas que declaró en el año 2017.

-La persona solicitante, con fecha 30/05/2018, comunica que ha plantado la superficie conferida.

-En año **2019**:

-La persona solicitante realiza 2 REGEPAS de la misma fecha, el 17/04/2019, en las que declara la misma superficie de 11,08 Has, de las que: 6,54 Has son de cebada; 3,52 Has, de barbecho tradicional; 0,66 Has, de olivar; 0,32 Has, de viñedo y 0,04 ha de cabecera de cultivo permanente.

-La persona interesada solicita ayuda por pago básico, pago verde e indemnización compensatoria en zonas de montaña; pero no consta que haya cobrado estas ayudas.

La persona solicitante declara todas las Parcelas que declaró en el año 2017, y de las nuevas que declara este año, en 2018, parte, la declaró uno de los arrendadores.

-Con fecha 17/04/2019, la persona interesada solicita Derechos de pago básico a la Reserva nacional como agricultor que comienza su actividad agraria.

-En año **2020**:

-Con fecha 06/03/2020, la persona solicitante realiza un REGEPA, en el que declara 14,63 Has, de las que: 6,54 Has son de cebada; 4,19 Has, de barbecho tradicional; 1,83 Has, de trigo; 1,00 Has, de pastos permanentes; 0,71 Has, de olivar; 0,34 Has, de viñedo; 0,02 Has, de cabecera de cultivos permanentes; 0,71 Has, de olivar; 0,34 Has, de viñedo; y 0,02 Has, de cabecera de cultivo permanente.

-La persona interesada: i) dispone de carné básico de aplicador de productos fitosanitarios desde 18/12/2018 y cualificado desde 24/01/2019; ii) cuenta con maquinaria inscrita en el ROMA: 1 pulverizador que inscribió el 07/04/2017; iii) no consta dada de alta en la AEAT ni la Seguridad Social; iv) no consta que tenga el Cuaderno de explotación.

Segundo

1. Como se ha señalado ya, en vista de las circunstancias indicadas, el 31 de julio de 2020, la Consejería actuante dictó una Resolución por la que incoó el procedimiento de Revisión de oficio núm. 65/2020, de las siguientes actuaciones administrativas, que se concretan en el Fundamento Jurídico Octavo de la misma:

-Resolución núm. 700, de 7 de julio de 2016, del Director General de Desarrollo Rural, por la que (se autorizó, a la persona interesada, a plantar) una superficie total de 0,3447 Has, sobre una superficie declarada admisible de 2,9742 Has.

-Resolución de 4 de noviembre de 2016, del Director General de Desarrollo Rural, por la que se autorizó la plantación, PL-1, en el término municipal de Alesón, en el Polígono X, Parcelas A/aa y B/aa, por una superficie de 0,3447 Has.

-Inscripción en el Registro de Viñedo, de 8 de agosto de 2018, por una superficie de 0,2768 Has, en Alesón (010), Polígono X, Parcela a, Recinto aa; y Parcela a, Recinto bb, por una superficie de 0,0179 Has, en total 0,2947 Has.

-Inscripción en el Registro de Viñedo, de 14 de noviembre 2018, en el Municipio 010, Polígono X, Parcela B, Recinto bb, por una superficie de 0,0341 Has; y Parcela B, Recinto cc, por una superficie de 0,0159 Has. En total, 0,0500 Has.

La misma Resolución dispuso suspender la inscripción del viñedo a que se refiere el expediente, declarándolo como viñedo no inscrito, e instar su arranque, avocando la competencia para sí la titular de la Consejería actuante.

Por otro lado, la Resolución de inicio acordó conferir traslado a la persona interesada para que, en plazo de diez días, formulase las alegaciones que considerase oportunas, siendo notificada la misma a la interesada en fecha 5 de agosto de 2020.

2. La persona interesada presentó un escrito de alegaciones, de fecha 19 de agosto de 2020, en el que, resumidamente, indica lo siguiente:

-Que se encuentra dada de alta tanto en la AEAT como en Seguridad Social dentro de la actividad agraria y ello desde antes de 1 de agosto de 2015, fecha en que se publicaron las normas de reparto.

-Que, respecto de la suscripción o no de seguros agrarios, ello es una mera decisión empresarial.

-Que, si en el expediente no consta documentación acreditativa de la tenencia de las Parcelas en las que va a realizarse la plantación, es porque las mismas son de su propiedad.

-Que aporta declaraciones del IRPF de los ejercicios 2016 a 2019, ambos inclusive, en todos los cuales aparecen sus ingresos por actividad agraria.

-Que cuenta con capacitación suficiente para ser Jefe de explotación, habiendo realizado diversos cursos formativos.

-Que lleva ligada al sector agrícola desde hace más de dieciocho años.

3. El 24 de septiembre de 2020, la Secretaria General Técnica de la Consejería actuante emitió la Propuesta de resolución, en el sentido de: declarar la nulidad de las actuaciones objeto del procedimiento revisor; declarar como viñedo no inscrito e instar el arranque del plantado en base a la autorización revisada; y recabar el informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja.

Por lo que se refiere a las manifestaciones realizadas por la interesada en su escrito de alegaciones ya referido, la Propuesta de Resolución indica que:

-Para la comprobación de la condición (de la persona) solicitante como Jefe de explotación, se deberá comprobar que, en el momento de la apertura del plazo de solicitudes, (es dicha persona interesada) quien está asumiendo el riesgo empresarial de su explotación.

-La (persona) interesada aporta, extracto del IAE de la AEAT, en el que consta como fecha de inicio en la actividad agrícola el 1 de noviembre de 2014 (y también un) informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social en el que consta la inscripción de la (persona) interesada en el Régimen agrario por cuenta ajena del 1 de septiembre de 2002 al 31 de octubre de 2002 y la inscripción en Régimen de Autónomos en el cultivo de la vid desde el 1 de noviembre de 2016.

-También constan inscripciones en el Régimen General, en concreto en concepto de empresa titularidad del (cónyuge de la persona) interesada y titular de explotación agraria activa, que ponen de manifiesto el trabajo efectuado por la (persona) interesada para su (cónyuge) en los períodos concretos de recolección de cosecha. La (persona) interesada se dio de alta en Seguridad Social en el Régimen de Autónomos el 1 de noviembre de 2016, momento posterior al de la presentación de las solicitudes de nuevas plantaciones 2016. Por otro lado, dicha inscripción se corresponde con el código de actividad 0121 "Cultivo de la vid", que no es la indicada para quien se declara Jefe de explotación agraria en la que no existe viñedo. A este respecto, recordemos que ser joven nuevo viticultor era también requisito ineludible para obtener nuevas plantaciones y exige se Jefe de explotación, que implica desarrollar una actividad agraria orientada a la venta de productos agrarios.

-Analizadas las declaraciones (del IRPF) correspondientes a los ejercicios fiscales 2015,2016,2017,2018 y 2019, se observa que, en el ejercicio 2015, la (persona) interesada ya declaró a la AEAT unos ingresos derivados de la venta de uva y, sin embargo, en el año 2016, declaró, ante esta Administración, que no era viticultor para acceder al reparto de nuevas plantaciones en 2016.

-Esto se extrae de su declaración de IRPF del ejercicio fiscal correspondiente a 2015, en el que imputa a la venta de "producto 9" unos ingresos íntegros de 4.830,20 euros. Posteriormente, en el ejercicio fiscal de 2016, los ingresos íntegros declarados por el mismo "producto 9" son de 35.196,96 euros y, por el "producto 6", son 5.680,86 euros; en el ejercicio 2017, declara ingresos íntegros, por el "producto 9," por 19.534,60 euros y, en el ejercicio 2018, los ingresos íntegros por el "producto 9", son por un importe de 6.474,84 euros y, por el "producto 6", por 1.228,95 euros.

-Dicho "producto 9" se corresponde con los rendimientos derivados de uva de vino de Rioja, por lo que dicho dato revela que la (persona) interesada estaba desarrollando la actividad como viticultora antes del 1 de febrero de 2016, aunque el viñedo no estuviera inscrito a su nombre en el Registro de Viñedo y aunque no aparezca su explotación agraria en el REA hasta la campaña 2016.

-Según los datos, la primera vez que aparece inscrito viñedo a nombre de la (persona) interesada es en la campaña 2018, por una superficie de 0,3447 Has, que se corresponde con el viñedo concedido en el reparto de nuevas plantaciones 2016.

-Ciertamente, el expediente se ha iniciado como una revisión de oficio de la autorización, considerando que la interesada no cumplía el requisito de ser Jefe de una explotación agraria a fecha de solicitud, pero la documentación puesta de manifiesto en el trámite de audiencia y mediante la que la (persona) interesada ha pretendido reforzar su posición como Jefe de explotación mediante

la acreditación de ingresos agrarios, han puesto de manifiesto importantes carencias en cuanto al cumplimiento del igualmente definitivo para formar parte del Grupo 1 “Nuevo viticultor”.

-A la vista de todo lo expuesto, podemos concluir que existen suficientes indicios para considerar que estamos ante un supuesto de elusión de los criterios de admisibilidad o prioridad mediante la creación de condiciones artificiales, ya que la (persona) interesada era viticultora a la fecha de presentación de las diversas solicitudes de nuevas plantaciones, 9 de marzo de 2016, por un total de 2.9742 Has.

-Por lo tanto, la (persona) interesada no puede ser considerada como nuevo viticultor a fecha de solicitud, por lo que no procede que forme parte del Grupo de prioridad “joven nuevo viticultor”. Ante el incumplimiento de una condición esencial para obtener la autorización, estaríamos ante una causa de nulidad de la autorización concedida, según el art. 47.1.f) de la Ley 39/2015.

-La (persona) interesada aporta al expediente dos diplomas acreditativos de la realización de cursos de formación de fecha 31 de mayo de 2019 y 20 de enero de 2020, pero dichos cursos de formación no pueden aceptarse para acreditar la condición de Jefe de explotación de la (persona) interesada en el procedimiento de reparto de nuevas plantaciones, en cuanto que se refieren a un momento posterior al de presentación de solicitudes en el mismo.

4. Mediante informe de 6 de octubre de 2020, los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja se pronunciaron en sentido favorable a la Propuesta de revisión de oficio, y consideraron que las autorizaciones administrativas conferidas incurren en la causa de nulidad del art. 47.1.f) de la Ley 39/2015, que declara nulos de pleno Derecho los actos, expresos o presuntos, contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, pues la persona solicitante obtuvo autorizaciones administrativas sin cumplir los requisitos esenciales para su obtención.

5. El expediente fue remitido a este Consejo Consultivo, teniendo entrada en fecha 6 de noviembre de 2020, día en el que, por la Secretaria General Técnica de la Consejería actuante, se acordó la suspensión del plazo para dictar Resolución por el tiempo que medie entre la petición el Dictamen a este Consejo y la recepción del mismo.

6. En este asunto, recayó nuestro Dictamen 85/2020, en el que concluíamos que, habiendo modificado la Propuesta de resolución la razón por la que se declaraba la revisión de oficio de los actos administrativos ya referidos; puesto que, en la misma, se consideraba que la persona interesada había acreditado la condición de *Jefe de explotación*, pero, al hacerlo, se ponía de manifiesto que carecía de la condición de *nuevo agricultor*, por lo que no podía ser incluida en el *Grupo 1*, donde ambas condiciones son requisito esencial para obtener la autorización de nuevas plantaciones y no habiéndose dado trámite de audiencia a la interesada para alegar sobre esa nueva circunstancia, que no había sido objeto del expediente, concluíamos que el procedimiento debía retrotraerse al momento en que debió darse traslado, a la persona interesada, de la Propuesta de resolución de fecha 24 de septiembre de 2020, para que la misma pudiera formular alegaciones.

7. La Consejería actuante, a la vista de nuestro dictamen, confirió dicho traslado en fecha 21 de diciembre de 2020, a consecuencia del cual, la persona interesada, debidamente representada, presentó un escrito de alegaciones de fecha 7 de enero de 2021.

8. En fecha 13 de enero de 2021, la Secretaría General Técnica de la Consejería actuante ha dictado una segunda Propuesta de resolución en el sentido de: i) declarar la nulidad de las actuaciones objeto del procedimiento revisor; ii) declarar como viñado no inscrito e instar el arranque del plantado en base a la autorización revisada avocando la competencia para si la titular de dicha Consejería; y iii) recabar el informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja.

9. Dicho informe es emitido en fecha 14 de enero de 2012, en sentido favorable a la referida segunda Propuesta de resolución de 13 de enero de 2021, al considerar que las autorizaciones administrativas conferidas incurren en la causa de nulidad del art. 47.1.f) de la Ley 39/2015, que declara nulos de pleno Derecho los actos, expresos o presuntos, contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, pues la persona solicitante obtuvo autorizaciones administrativas sin cumplir los requisitos esenciales para su obtención.

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito firmado, enviado y registrado de salida electrónicamente con fecha 19 de enero de 2021 y registrado de entrada en este Consejo el 19 de enero de 2021, la Excm. Sra. titular de la Consejería actuante, remitió, al Consejo Consultivo de La Rioja, para dictamen, el expediente tramitado sobre el asunto referido.

Segundo

El Sr. Presidente del Consejo Consultivo de La Rioja, mediante escrito firmado, enviado y registrado de salida electrónicamente el 20 de enero de 2021, procedió, en nombre de dicho Consejo, a acusar recibo de la consulta, a declarar provisionalmente la misma bien efectuada, así como a apreciar la competencia del Consejo para evacuarla en forma de dictamen.

Tercero

Asignada la ponencia al Consejero señalado en el encabezamiento, la correspondiente ponencia quedó incluida, para debate y votación, en el orden del día de la sesión del Consejo Consultivo convocada para la fecha allí mismo indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Necesidad del dictamen del Consejo Consultivo

1. El carácter preceptivo del dictamen del Consejo Consultivo en los casos de revisión de los actos administrativos resulta, con toda claridad, de lo dispuesto en el art. 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas (LPAC'15), a cuyo tenor: *“las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1”*.

Reiteran la necesidad del dictamen del Consejo Consultivo en estos casos nuestra Ley reguladora (Ley 3/2001, de 31 de mayo, art. 11.f) y el Reglamento que la desarrolla (aprobado por Decreto 8/2002, de 24 de enero art. 12.2.f).

2. Por lo demás, como claramente se infiere del art. 106.1 LPAC'15, el dictamen del Consejo Consultivo en materia de revisión de actos administrativos es, además de preceptivo, habilitante de la ulterior decisión revisora de la Administración, que sólo puede declarar la nulidad del acto si dicho dictamen hubiere sido favorable, esto es, estimatorio de la nulidad denunciada.

Segundo

Sobre la nulidad de pleno Derecho de las Resoluciones de 7 de julio y 4 de noviembre de 2016 de la Dirección General de Desarrollo Rural.

1. El concepto de *requisito esencial*.

El art. 47.1.f) LPAC'15 dispone que son nulos de pleno derecho “*los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición*”.

A) La jurisprudencia y la doctrina han insistido, con reiteración, en la necesidad de interpretar restrictivamente los preceptos que tipifican las causas de nulidad de los actos administrativos. Y ello, porque la categoría jurídica de la *nulidad de pleno Derecho* es, dentro de la teoría de la invalidez del acto administrativo, una excepción frente a la *anulabilidad*, que constituye, a su vez, la consecuencia prevista, como regla general, para los supuestos en que un acto administrativo contraviene el ordenamiento jurídico (art. 48.1 LPAC'15).

Así lo han señalado, entre otros muchos, el Dictamen del Consejo de Estado (DCE) 485/2012, de 24 de mayo, y los en él citados.

Por ese mismo carácter excepcional de la nulidad de pleno Derecho, en la aplicación del art. 47.1.f) LPAC'15 (y de su precedente, el art. 62.1.f, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, LPAC'92) la jurisprudencia y la doctrina han trazado un concepto sumamente estricto de lo que debe entenderse por *requisitos esenciales* cuya ausencia determina la nulidad radical de los actos administrativos atributivos de derechos o facultades.

A pesar de la dificultad de establecer un criterio interpretativo general en una materia que, por su propia naturaleza, es esencialmente casuística, pueden señalarse, como orientaciones generales, que solamente son requisitos esenciales “*los auténticos presupuestos que explican y justifican la adquisición del derecho o facultad de que se trate*” (DCE 845/2013), o, en palabras del DCE 2.741/2010, los “*relativos a la estructura definitoria del acto*”.

Por otra parte, la calificación de un requisito como *esencial* ha de ceñirse “*al objeto, causa y fin del acto administrativo de que se trate*” (DCE 461/2009); añadiendo el DCE 485/2012 que “*la esencialidad presupone que ha de tratarse de un requisito que objetivamente el interesado no puede llegar a cumplir en ningún momento, por tratarse de un hecho acontecido invariable que elimina cualquier posibilidad de subsanación, y que no precisa, para constatar su carencia, de la interpretación de norma jurídica alguna*”.

En iguales términos, la Sala 3ª del Tribunal Supremo (TS) ha indicado que “*no todos los requisitos necesarios para ser titular de un derecho pueden reputarse ‘esenciales’: tan sólo los más significativos y, directa e indisociablemente, ligados a la naturaleza misma de*

aquél” (STS 26-11-2008, R.Cas 1988/2006).

Esta misma idea la ha expresado el Consejo Consultivo de Canarias (Dictamen 585/2011) al señalar que la expresión *requisito esencial* de un acto administrativo debe reservarse a “*aquellos que le son realmente inherentes y le otorgan su configuración propia, con lo que su ausencia afecta a la finalidad perseguida por la norma infringida, de modo que el acto en cuestión tiene efectos radicalmente contrarios a los queridos por dicha norma*”.

B) Por nuestra parte y en la misma línea, hemos perfilado esta doctrina, sosteniendo en diversos dictámenes: i) que hay que reconocer la dificultad de establecer un criterio interpretativo general en una materia que, por su propia naturaleza, es esencialmente casuística (D.44/17); y ii) que no todos los requisitos para la adquisición de una facultad o derecho merecen la calificación de *esenciales*, pues, como ha señalado el Consejo de Estado (DCE 3491/99), una interpretación amplia de los mismos comportaría fácilmente una desnaturalización de las causas legales de invalidez, por cuanto la carencia de uno de ellos determinaría la nulidad de pleno Derecho, vaciando de contenido no pocos supuestos de simple anulabilidad, lo que representaría un grave peligro para la seguridad jurídica (D.96/10, D.40/11, D.44/11 y D.44/17).

Por tanto, en nuestro criterio, la *esencialidad* de los requisitos debe: i) referirse al sujeto que realiza o al objeto sobre el que recae la actividad; ii) ser incontrovertible; iii) afectar a un acto que determine el nacimiento de un derecho o una facultad en el sujeto, como sucede en los nombramientos y las concesiones, o que posibilite la efectividad de uno que el sujeto ya tenía, como ocurre en el caso de las autorizaciones; y iv) quedar reservada para los requisitos más básicos y significativos que estén, directa e indisolublemente, ligados a la naturaleza misma del derecho o facultad adquiridos, como son los que determinan, en sentido estricto, la adquisición del derecho o facultad de que se trate (D.96/10, D.40/11, D.44/11 y D.44/17, entre otros).

Esta doctrina conlleva: i) que el art. 47.1.f) LPAC’15 (como antes el art. 62.1.f) LPAC’92) debe ser objeto de una interpretación *estricta*, para evitar una interpretación extensiva y amplia de los requisitos esenciales (D.40/11, D.44/11 y D.44/17, entre otros); y ii) que debe distinguirse entre requisitos *esenciales* y meramente *necesarios*, pues sólo los primeros pueden fundar una declaración de nulidad de pleno Derecho (D.96/10, D.40/11 y D.44/11).

En aplicación de estos criterios, hemos dictaminado que concurre esta causa de nulidad de pleno Derecho en múltiples casos de autorizaciones para plantar viñedos conferidas a personas que carecían de los requisitos esenciales para obtenerlas: i) por carecer de la titularidad privada de los derechos de plantación exigibles para realizar replantaciones de viñedo (D.32/99, D.37/99, D.38/99, D.11/01, D.17/01, D.46/01, D.40/02, D.42/02, D.56/02, D.59/02, D.29/05, D.34/05, D.35/05, D.40/05, D.41/05, D.43/05,

D.45/05, D.60/05, D.61/05, D.67/05, D.73/06, y D.78/07, entre otros); o ii) por presentar al efecto derechos de plantación ficticios e inexistentes (D.43/14, D.46/14, D.49/14, D.51/14, D.55/14, D.57/14, D.59/14, D.60/14, D.66/14, D.2/15, D.5/15, D.6/15, D.7/15, D.8/15, D.9/15, D.11/15, D.25/15, D.31/15, D.32/15, D.36/15, D.41/15, D.42/15, D.43/15, D.44/15, D.45/15, D.46/15, D.32/17, D.36/17, D.38/17 y D.43/17 entre otros).

Y hemos aclarado, además, que dicha nulidad se produce prescindiendo por completo del modo fraudulento en que, en su caso, se lograra aparentar, en el caso de autorizaciones para plantar de viñedo, la previa inscripción de las viñas en el Registro de viñedo y su ulterior y ficticio arranque (D.43/14, D.46/14, D.49/14, D.51/14, D.55/14, D.57/14, D.59/14, D.60/14, D.66/14, D.2/15, D.6/15, D.7/15, D.8/15, D.9/15, D.11/15, D.25/15, D.31/15, D.32/15, D.36/15, D.41/15, D.42/15, D.43/15, D.45/15, D.46/15, D.32/17, D.36/17, D.38/17 y D.43/17 entre otros).

2. El bloque normativo aplicable.

Para proyectar las anteriores consideraciones al caso que nos ocupa, es preciso analizar el bloque normativo que disciplinó la producción de los actos administrativos cuya revisión se pretende, y determinar la razón de ser de la condición -incumplida por la persona interesada- de ser *joven nuevo viticultor y jefe de explotación*, así como la consecuencia jurídica que debe anudarse a la ausencia de esa condición.

A) El Reglamento núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados (OCM) de los productos agrarios y se derogan los Reglamentos CEE núms. 922/72, 234/79, 1037/2001 y 1234/2007, establece un nuevo régimen de autorizaciones para las plantaciones de vid para el periodo 01-01-2016 a 31-12-2030 (arts. 61 y ss).

En lo que hace al caso, este nuevo Reglamento -aunque modifica aspectos sustanciales de la normativa comunitaria anterior- mantiene, sin embargo, la premisa básica de que la plantación de viñedos está, como regla general, prohibida, y que esa prohibición sólo puede exonerarse mediante la obtención de una previa autorización administrativa (art. 62.1 del Reglamento 1308/2013).

En tal sentido, nos remitimos a la doctrina sentada por este Consejo Consultivo en numerosos dictámenes (por todos, D.43/14, D.46/14 y los en ellos dictados). En particular, hemos analizado el nuevo régimen jurídico de plantaciones de viñedo encabezado por el Reglamento UE 1.308/2013 en nuestros dictámenes D.41/16 y D.6/2017, relativos, respectivamente, a la actual Ley autonómica 1/2017, de 3 de enero, de Control del potencial vitícola de La Rioja, y a su Reglamento, aprobado por Decreto 4/2017, de 3 de febrero.

Pues bien, de entre los diferentes mecanismos autorizatorios contemplados por el

vigente Derecho Comunitario, los arts. 63 y 64 del Reglamento 1308/2013 regulan la concesión de “*autorizaciones para nuevas plantaciones*”. Y así, en lo que interesa al caso, los Estados miembros “*pondrán a disposición, cada año, autorizaciones para nuevas plantaciones*”, cuya superficie total estará necesariamente limitada (art. 63). En principio, esa nueva superficie plantable será la correspondiente “*al 1% de toda la superficie realmente plantada con vid en su territorio, calculada el 31 de julio del año anterior*” (art. 63.1), sin perjuicio de las matizaciones que, a esa regla general, se establecen en el propio art. 63. En cualquier caso -se insiste-, la nueva superficie plantable es siempre limitada.

B) En la medida en que las nuevas superficies susceptibles de ser autorizadas son limitadas, el art. 64 del Reglamento 1308/2013 determina que los Estados miembros establecerán -dentro del marco del propio art. 64- criterios *de admisibilidad* de las solicitudes; y *de prioridad* entre las que hayan sido admitidas.

Naturalmente, si, en un Estado miembro y en un año concreto, la superficie total cubierta por las solicitudes admisibles no excede de la superficie puesta a disposición en ese año, todas las solicitudes serán aceptadas y se conferirán todas las autorizaciones (art. 64.1).

Pero, en el caso contrario (esto es, si la superficie total cubierta por las solicitudes admisibles supera a la superficie que ha sido puesta a disposición), “*las autorizaciones se concederán, de acuerdo a una distribución proporcional de hectáreas, a todos los solicitantes, sobre la base de la superficie para la que hayan solicitado la autorización. También podrá procederse a dicha concesión, parcial o totalmente, de acuerdo con uno o varios de los siguientes criterios de prioridad objetivos y no discriminatorios*”.

Entre tales criterios de *prioridad*, que el precepto enumera (art. 64.2) y que los Estados miembros, una vez los han seleccionado, han de hacer públicos y comunicar a la Comisión (art. 64.3), se encuentra el de que “*los productores planten vides por primera vez y estén establecidos en calidad de jefes de la explotación (nuevos viticultores)*” (art. 64.2, a), del Reglamento 1308/2013).

Por su parte, este criterio, descrito por el art. 64.2, a) del Reglamento 1308/2013, ha sido desarrollado por el Reglamento Delegado 560/2015, de la Comisión (Anexo II.A), el cual, entre otras previsiones, define cuándo una persona cumple el criterio de ser nuevo viticultor, es decir plantar vides por primera vez y ser jefe de explotación:

En lo que hace a las personas físicas, sólo se cumple este criterio si también se cumple la condición señalada en el Anexo II.A.1.a) del Reglamento Delegado 560/2015, de que:

“Una persona física que está plantando vides por primera vez y está establecida en calidad de

jefe de explotación (nuevo viticultor) ejerce un control, efectivo y a largo plazo, sobre la persona jurídica, en cuanto a las decisiones relativas a la gestión, los beneficios y los riesgos financieros; cuando varias personas físicas, incluidas las personas que no sean nuevos viticultores, participen en el capital o la gestión de la persona jurídica, el nuevo viticultor estará en condiciones de ejercer ese control efectivo y a largo plazo por sí solo o conjuntamente con otras personas”.

Por otro lado, el citado Anexo II.A): i) enfatiza que “*las condiciones establecidas en las letras a) y b) del párrafo primero serán aplicables, mutatis mutandis, al grupo de personas físicas, independientemente del estatuto jurídico que conceda la legislación nacional a ese grupo y a sus miembros*”; y ii) permite a los Estados miembros “*imponer la condición suplementaria de que el solicitante sea una persona física que, en el año de la presentación de la solicitud, no tenga más de 40 años (joven productor)*”.

En fin, junto a ese *criterio de prioridad*, se describen otros muchos. Por ejemplo, que los viñedos para los que se pida autorización contribuyan a la “*preservación del medio ambiente*”, o que se establezcan en superficies con “*limitaciones específicas naturales*”, entre otros.

Lo relevante aquí es reparar en el hecho de que estos *criterios de prioridad* constituyen un instrumento encaminado a que los Estados miembros hagan efectivas sus respectivas orientaciones de política agraria pues, mediante esos *criterios de prioridad*, los Estados darán preferencia, al conferir nuevas autorizaciones, a unos u otros tipos de solicitantes, según las circunstancias objetivas (su condición de *joven y nuevo viticultor*, por ejemplo) que en ellos concurren.

Por ello, a través de la concreción definitiva de esos *criterios de prioridad*, los Estados miembros (en este caso, el Reino de España), seleccionan los grupos de viticultores que consideran de interés prevalente o preferente por razones de política agraria; selección que, en definitiva, constituye la expresión de los intereses generales que se pretenden promover, proteger o tutelar al conferir autorizaciones administrativas sobre las nuevas superficies plantables.

El propio Derecho comunitario ha establecido mecanismos específicos para salvaguardar la efectividad de esos objetivos de la legislación agrícola sectorial. Así, el art. 60 del Reglamento 1306/2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agraria Común (PAC), bajo la rúbrica *Cláusula de elusión*, dispone que:

“Sin perjuicio de cualesquiera disposiciones específicas, no se concederá ninguna ventaja prevista en la legislación agrícola sectorial a personas físicas o jurídicas de las que se demuestre que han creado artificialmente las condiciones exigidas para obtener esas ventajas, contrarias a los objetivos de dicha legislación”.

C) Por su parte, el art. 3 del Reglamento de Ejecución 561/2015 habilita a los Estados miembros, no sólo a establecer los *criterios de prioridad*, sino también a “*atribuir una*

*importancia diferente a cada uno de los diferentes criterios de prioridad elegidos”, de forma que “tales decisiones permitirán a los Estados miembros establecer un **orden de prioridad** de las solicitudes individuales a nivel nacional..., sobre la base del cumplimiento de estas solicitudes de los criterios de prioridad elegidos”.*

De nuevo, el art. 6 del Reglamento 561/2015 distingue entre los supuestos en que la superficie solicitada y admisible sea inferior a la puesta a disposición por cada Estado (en cuyo caso, “*los Estados miembros concederán las autorizaciones para toda la superficie solicitada por los productores*”); y el caso contrario, en el que ha de aplicarse los procedimientos de selección regulados en el Anexo I del citado Reglamento.

Esos procedimientos pueden suponer la asignación de superficies por *criterios de mera proporcionalidad* (Anexo I.A) y también “*con arreglo a los criterios de prioridad*” (Anexo I.B).

En este segundo supuesto, y en síntesis, los Estados miembros atribuirán, a cada uno de esos criterios, una determinada ponderación o valor; y confeccionarán una lista que ordene las solicitudes presentadas y admisibles, conforme a la puntuación total obtenida por cada solicitante en aplicación de esos criterios (Anexo I.B.c).

A partir de ahí, la citada norma dispone que: i) *los Estados miembros concederán las autorizaciones a los solicitantes individuales, siguiendo el orden establecido en la lista mencionada en la letra c) y hasta el agotamiento de las hectáreas que vayan a asignarse, de acuerdo con los criterios de prioridad; ii) se concederá, en forma de autorizaciones, el número total de hectáreas requerido por el solicitante, antes de conceder una autorización al siguiente solicitante en la clasificación; y iii) en caso de que las hectáreas disponibles se agoten en una posición de la clasificación en la que varias solicitudes tengan el mismo número de puntos, las hectáreas restantes se asignarán de manera proporcional entre estas solicitudes”.*

D) La concreción y desarrollo de estas previsiones en el Derecho interno español se realizó, inicialmente, mediante el RD 740/2015, de 31 de julio, luego derogado por el RD 772/2017, de 28 de julio, actualmente vigente.

Por su parte, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR), se dictó el Decreto 86/2015, de 2 de octubre, por el que se regula la adaptación del control del potencial vitícola de La Rioja tras la aplicación del Reglamento (UE) 1.308/2013. Actualmente, el Decreto 86/2015 ha quedado derogado por la Ley 1/2017, de 3 de enero, de Control de potencial vitícola de La Rioja, y sustituido por el Decreto 4/2017, de 3 de febrero.

Los procedimientos para autorizar nuevas plantaciones, tramitados por la CAR, se han regido por el RD 740/2015: el procedimiento correspondiente al año 2016, por la

redacción originaria del RD 740/2015; y, el relativo a 2017, por la versión del RD 740/2015 resultante de la modificación operada por el RD 313/2016, de 29 de julio, vigente desde el 1 de agosto de 2016 (DF Única).

El RD 740/2015 es coherente con el marco normativo comunitario que acabamos de examinar, y distingue entre los requisitos de *admisibilidad* de solicitudes y los criterios de prioridad.

E) En cuanto a los *criterios de admisibilidad de solicitudes*, el art. 8 del RD 740/2015 dispone que:

“Para que una solicitud sea considerada admisible, el solicitante tendrá a su disposición, por cualquier régimen de tenencia previsto en el ordenamiento jurídico, la superficie agraria para la que solicita la autorización en la Comunidad Autónoma que se va a plantar, desde el momento en que presenta la solicitud hasta el momento de la comunicación de la plantación, que debe realizarse de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 del artículo 11”.

Por otro lado, establece que *“la autoridad competente verificará dicha circunstancia, al menos, en el momento de la presentación de la solicitud y en el momento de la mencionada comunicación de la plantación”*; y señala que, para la comprobación de dicho criterio de admisibilidad, las Comunidades Autónomas tendrán en cuenta, entre otros, el Registro General de la Producción Agrícola, regulado por el RD 9/2015, de 16 de enero, y cualesquiera Registros que tengan dispuesto en los que pueda ser comprobado ese requisito. Incluso, *“en casos debidamente justificados, en especial cuando se constate más de un solicitante sobre la misma Parcela, se podrá tener en cuenta otra documentación que verifique que el solicitante de la autorización cumple con el criterio”*.

Como es evidente, todos estos mecanismos de control se ordenan a garantizar que las superficies que se pretenden plantar de viñedo sean, realmente, admisibles en tanto que aptas para dicho fin; pero también a hacer efectiva la *cláusula de elusión* prevista por el art. 60 Reglamento 1306/2013; pues, con ese control, se trata de evitar que un solicitante, mediante un incremento ficticio de la superficie disponible (base de cálculo), pueda obtener (por aplicación del porcentaje correspondiente en caso de insuficiencia de superficie suficiente para todos los solicitantes), una autorización administrativa para plantar una superficie mayor de la que realmente le hubiera debido corresponder.

F) El RD 740/2015, además, establece y concreta los *criterios de prioridad* con arreglo a los cuales se ordenarán todas las solicitudes admisibles (arts. 9.3 y 10). En este sentido, el RD 740/2015, además de determinar *cuáles sean* esos criterios (art. 10), fija la *ponderación relativa* que se asigna a cada criterio, atribuyendo, a cada uno, una determinada puntuación (Anexo III).

-Entre esos *criterios de prioridad*, para la elaboración de la lista a que se refiere el art.

9.3, el art. 10.a) desarrolla el concepto de **joven nuevo viticultor**, contemplado en el art. 64.2.a) del Reglamento 1308/2013, y lo hace del modo siguiente, exigiendo (las negritas son nuestras):

*“Que el solicitante sea una persona, física o jurídica, que, en el año de la presentación de la solicitud, **no cumpla más de 40 años y sea un nuevo viticultor**.*

*Conforme a la letra a) del apartado 2 del artículo 64 del Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, se entenderá como **nuevo viticultor la persona que plante vides por primera vez y esté establecido en calidad de jefe de explotación**.*

*Para la comprobación del requisito sobre la **plantación por primera vez**, en el momento de la apertura del plazo de solicitudes se comprobará que **el solicitante no ha sido titular de ninguna Parcela de viñedo en el Registro vitícola**.*

*Para la comprobación de la condición del solicitante como **jefe de explotación**, se deberá comprobar que, en el momento de apertura del plazo de solicitudes, **el solicitante es quien está asumiendo el riesgo empresarial de su explotación**.*

*Se considerará que una persona jurídica, independientemente de su forma jurídica, cumple este criterio de prioridad si reúne alguna de las condiciones establecidas en los puntos 1) y 2) del apartado A del Anexo II del Reglamento Delegado 560/2015, de la Comisión. A estos efectos, se entenderá que **un solicitante nuevo viticultor ejerce el control efectivo sobre la persona jurídica cuando tenga potestad de decisión dentro de dicha persona jurídica**, lo que exige que su participación en el capital social de la persona jurídica sea más de la mitad del capital social total de ésta y que posea más de la mitad de los derechos de voto dentro de la misma.*

*En virtud del punto 3) del apartado A del Anexo II del Reglamento Delegado 560/2015, de la Comisión, el solicitante, ya sea persona física o jurídica, se deberá comprometer, durante un periodo de cinco años desde la plantación del viñedo, a **no vender ni arrendar** la nueva plantación a otra persona física o jurídica. Además, si es persona jurídica, se deberá comprometer, durante un plazo de cinco años desde la plantación del viñedo, a **no transferir**, a otra persona o a otras personas, **el ejercicio del control, efectivo y a largo plazo, de la explotación, en cuanto a las decisiones relativas a la gestión, los beneficios y los riesgos financieros**, a no ser que esa persona o personas reúnan las condiciones de los puntos 1) y 2) de dicho apartado que eran de aplicación en el momento de la concesión de autorizaciones.*

Los compromisos requeridos en este apartado sólo serán tenidos en cuenta en caso de que, en el año en que se presenta la solicitud, no hubiera suficiente superficie disponible para todas las solicitudes admisibles y hubiera, por tanto, que aplicar los criterios de prioridad”.

-El art. 10,a) del RD 740/2015 describe el concepto de **jefe de explotación** de modo coherente a como lo hace el Anexo II.A.1 del Reglamento Delegado 560/2015. Y es que, en línea con el Anexo citado, cuando el art. 10,a) RD 740/2015 exige para merecer la calificación de **joven nuevo viticultor**, el requisito de ser **jefe de explotación**, dota explícitamente a ese concepto de un contenido decididamente material y económico, dado que, para tener tal condición, no basta con que una persona ostente la mera titularidad

formal, aparente o fiduciaria, de una explotación agrícola; sino que sólo puede ser considerado como *jefe de explotación* quien realmente “*está asumiendo el riesgo empresarial de su explotación*”, exigencia que el Anexo II.A.1 del citado Reglamento Delegado 560/2015 expresa aludiendo a quien “*ejerce un control, efectivo y a largo plazo, sobre la persona jurídica, en cuanto a las decisiones relativas a la gestión, los beneficios y los riesgos financieros*”, debiendo recordarse, por obvio que resulte, que lo propio de cualquier actividad empresarial es la asunción, por su titular, del riesgo económico inherente a la, mejor o peor, marcha de las operaciones económicas que se desarrollen en el mercado por virtud de esa actividad.

-A partir de ahí, y en plena congruencia con el ordenamiento comunitario, el art. 11.1 del RD 740/2015 señala que, una vez ordenadas la solicitudes admisibles por su orden de puntuación: i) “*a cada solicitud con mayor puntuación, se le concederá toda la superficie solicitada, antes de pasar a la siguiente solicitud, hasta que se agote la superficie disponible*”; y ii) “*a las solicitudes con una misma puntuación, para cuyo conjunto no hubiera suficiente superficie disponible para satisfacer la superficie solicitada, se les repartirá, la superficie disponible, a prorrata, tal y como está definido en el Anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/561, de la Comisión*”.

Estas previsiones se aplican igualmente “*en caso de que se haya limitado la superficie disponible para autorizaciones en zonas geográficas delimitadas de una Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida específica, en virtud de la decisión del apartado 4 del artículo 6, y la superficie solicitada en dichas zonas sea superior a la superficie máxima fijada para esa zona según el artículo 6*”. (art. 11.2 del RD 740/2015).

G) A modo de conclusión, del marco normativo examinado hasta aquí, se desprende:

-Que la plantación de nuevas superficies de viñedo está sujeta a una prohibición general, que sólo puede ser absuelta o exonerada, en lo que hace al caso, mediante la obtención de una autorización administrativa.

-Que, tratándose de las autorizaciones para *nuevas plantaciones* de viñedo, las superficies que pueden ser autorizadas son necesariamente *limitadas* (arts. 63 y 64 Reglamento 1.308/2013).

-Que, cuando la superficie total *solicitada* por todos los participantes en el procedimiento de autorización es superior a la superficie total *autorizable*, los Estados miembros pueden establecer un orden de prelación entre unos solicitantes y otros, mediante la fijación y ponderación de diferentes *criterios de prioridad*.

-Que, cuando los Estados miembros establecen esos criterios, sólo pueden ser adjudicatarios de autorizaciones de nuevas plantaciones aquellos solicitantes que, por

su grado de cumplimiento de los criterios de prioridad, tengan *puntuación suficiente* para ello, ya que los demás deben quedar excluidos.

-Que esta exclusión es una *consecuencia necesaria y automática* del hecho de que la nueva superficie plantable sea limitada.

H) En cuanto a la normativa aplicable al procedimiento administrativo de revisión de oficio, debemos recordar que es la contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas (LPAC'15), pues su DT 3ª, b) establece que los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de su entrada en vigor (que se produjo el 2 de octubre de 2016, según su DF 7ª) se sustanciarán por las normas establecidas en dicha Ley 39/2015.

3. El requisito de ser *joven nuevo agricultor y jefe de explotación*.

A) Pues bien, como resulta de un examen conjunto del art. 10 y del Anexo III del RD 740/2015, el criterio de prioridad más relevante en el Derecho español, sin duda, es el de que el solicitante sea un *joven nuevo viticultor*.

Y ello porque, además de que, a tal criterio, se le atribuyen, *per se*, 10 puntos, de un total de 20; el art. 10.a) del RD 740/2015 describe esa figura de modo tal que el cumplimiento de los requisitos señalados por el precepto (plantar vides por primera vez, no tener más de 40 años y ser el jefe de una explotación agrícola), entraña también que el *joven nuevo viticultor* se halle en el supuesto de hecho propio de los demás criterios de prioridad (no tener plantaciones sin derecho de plantación, no haberle vencido ninguna autorización, no tener plantaciones de viñedo abandonadas, o no haber incumplido compromisos a que estuvieran sujetas autorizaciones previas).

En definitiva, conforme al baremo contenido en el Anexo III del RD 740/2015 (tanto en su redacción originaria, como en la resultante del RD 313/2016), todo *joven nuevo viticultor* alcanza la puntuación máxima de 20 puntos.

En el caso que nos ocupa, en el ámbito territorial de la Denominación de Origen Calificada Rioja (DOCR), fue declarada autorizable una superficie total de 387 Has, mediante Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE del 30).

Sin embargo, la superficie admisible solicitada por los interesados del denominado *Grupo 1* (esto es: el de los *jóvenes nuevos viticultores*, que tenían 20 puntos) ya rebasaba

amplísimamente esa superficie máxima autorizable, por lo que el Ministerio de Agricultura -según recoge la citada Resolución de 4 de julio de 2016- informó a la CAR de que, a cada uno de los solicitantes pertenecientes a ese *Grupo 1*, en aplicación de la *regla de prorrata* establecida en el art. 11 RD 740/2015, no podría concedérseles autorización sino para un 11,59131781% de la superficie admisible solicitada por cada uno de ellos.

Naturalmente, ese reparto entre los solicitantes de mayor puntuación (20 puntos) agotó ya las 387 Has autorizables, por lo que los interesados con menor puntuación (esto es, cualquiera que no fuera *joven nuevo viticultor*) no pudo ya obtener autorización alguna, sencillamente porque no había más superficie disponible.

B) Expuesto lo que antecede, estamos ya en condiciones de afirmar: **i)** primero, que, de acuerdo con el marco normativo que debió regir el acto cuya revisión se pretende, el requisito de la *puntuación suficiente* es, sin duda, *esencial* para que cualquier solicitante de una autorización de nueva plantación fuera adjudicatario de la misma; y **ii)** segundo, que para obtener esa *puntuación suficiente*, es preciso reunir todas las condiciones que hacen a un solicitante merecedor de la condición de *joven nuevo viticultor*, y, con ello, la de tener la condición de *jefe de explotación*, entendida tal noción como la de *ser titular de una explotación agrícola, real y efectiva, cuya titularidad entrañe, para el solicitante, materialmente, el riesgo empresarial inherente a la actividad de producción vitícola*.

Pues bien, con arreglo a los parámetros interpretativos descritos en el apartado 1 de este Fundamento de Derecho, parece poco discutible que el requisito de la puntuación suficiente (y, con él, el de reunir los requisitos necesarios para ser considerado *joven nuevo viticultor*) debe reputarse *esencial* para la adquisición del *derecho o facultad* que el otorgamiento de la autorización entraña.

Y es que, si, como hemos expuesto con anterioridad, *requisitos esenciales* serían los que “*explican y justifican la adquisición del derecho o facultad de que se trate*”, o, si se prefiere, aquellos con cuya concurrencia el legislador quiere asegurar el cumplimiento de los fines perseguidos por una norma y la tutela de los intereses fundamentales que con ella se protegen o promueven; es evidente que la exigencia de que el solicitante de una nueva plantación tenga puntuación suficiente (y para ello, que tenga la condición de *joven nuevo viticultor*) entra dentro de la definición de *requisito esencial*, como hemos indicado, por todos, en nuestro dictamen D.45/17.

Por lo pronto, atendiendo al *objeto, causa y fin del acto*, debe repararse en que la Resolución cuya revisión se pretende es un acto administrativo de *naturaleza autorizatoria*, que exonera al interesado de una prohibición, la de plantar vides, que el ordenamiento jurídico impone y configura como general; y que tal Resolución se dictó en un procedimiento que es de *conurrencia competitiva*, en la medida en que, ante lo limitado de la superficie total autorizable, el otorgamiento de la autorización había de regirse por

criterios de prelación o prioridad, que excluyen (por mera inexistencia de superficie plantable) a quienes carezcan de puntuación bastante.

Y, por otro lado, la *finalidad perseguida* por la norma es clara: en los supuestos en que haya más superficie solicitada que superficie disponible, hay que poner en juego *criterios de prioridad o prelación*, que se establecen en la medida en que privilegian o priman a unos solicitantes respecto a otros (los *jóvenes nuevos viticultores*, en este caso), por razón de las circunstancias objetivas que concurran en ellos, y que se justifican en función de las directrices y orientaciones de política agraria que España, como Estado miembro de la UE, ha definido.

En este caso, como se ha expuesto, el Reino de España ha optado por establecer preferencia en la adjudicación de las nuevas superficies plantables a los *jóvenes nuevos viticultores*.

C) Explicado lo anterior y examinado el expediente remitido a este Consejo Consultivo, cabe concluir, como hace la Consejería tramitadora, que la persona solicitante carecía, en realidad, de la condición de *joven nuevo viticultor*.

En efecto, en la primera Propuesta de resolución, la Consejería actuante entendió que la persona interesada no era realmente *jefe de explotación*, pues no era titular de una explotación agraria, material y efectiva, cuyo riesgo empresarial asumiera. Sin embargo, las alegaciones presentadas por la persona interesada tras el trámite de audiencia que exigió nuestro primer dictamen sobre este asunto, revelaron indicios expresivos de que, en realidad, el requisito que no acreditada reunir la persona solicitante no era tanto el de ser *jefe de explotación* como el de ser *joven nuevo viticultor*, requisito éste último también exigido por la normativa citada para pertenecer al *Grupo 1* en el reparto de nuevas plantaciones de 2016.

Como hemos señalado en nuestro reciente dictamen D. 90/2020, cuya doctrina procede reiterar ahora: “las **condiciones legalmente exigidas son**, pues, **tres** (ser *joven* agricultor, ser *nuevo* viticultor y ser *jefe* de explotación); **las tres tienen el carácter de requisito esencial y son, además, acumulativas**, de suerte que, si falta cualquiera de ellas, la autorización administrativa conferida será nula de pleno Derecho por falta de un *requisito esencial*”.

Por ello mismo –lo adelantamos ya- dicha persona carecía del *requisito esencial* que le hubiera permitido ser adjudataria de la autorización para plantar viñedo que le fue otorgada por la Resolución cuya revisión se pretende, la cual, por la ausencia de tal *requisito esencial*, incurre en la causa de nulidad descrita por el art. 47.1.f) LPAC’15.

Como no podía ser de otro modo, la realidad material subyacente ha tenido que ser

desentrañada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a través de la acumulación de un conjunto de hechos indiciarios, pues la persona interesada creó artificialmente las condiciones para aparentar su condición de *jefe de explotación*.

En este sentido, debe recordarse que, en nuestro Derecho, las presunciones son un medio apto para la prueba de los hechos jurídicamente relevantes, de conformidad con los arts. 385 y 386 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (también en el ámbito de los procedimientos administrativos, ex art. 77.1 LPAC'15), requiriendo tal medio probatorio que, además de la prueba plena de los hechos-indicio, exista, entre éstos y los hechos presuntos, un *enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano* (art. 386 LECiv y, por todas, Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2016; R. cas. núm. 1740/2015).

En palabras de la Sentencia, de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de 29 de mayo de 2014 (Rec. 103/2013), *“la prueba de presunciones es perfectamente apta para descubrir un fraude de ley como el detectado, pues no puede exigirse la prueba directa de lo que pretende ocultarse, ya que es difícilmente imaginable que muestre al exterior y sin disimulo sus acciones quien realiza actividades que la legalidad no ampara”*.

4. Indicios expresivos de la falta de requisitos esenciales en el presente caso.

A) El expediente revisor que se nos ha remitido acredita, como antes hemos anunciado, los hechos indiciarios creados artificialmente por la persona interesada para aparentar que reúne los requisitos esenciales exigidos por la normativa vigente. En concreto, tales indicios son descritos y analizados, pormenorizadamente, en el Fundamento Jurídico Cuarto de la Propuesta de resolución, de la Secretaría General Técnica, de 24 de septiembre de 2020, a la que este Consejo se remite para evitar inútiles repeticiones. Sucintamente expuestos, son los siguientes:

-En año **2016**:

-La explotación figura con superficies, por primera vez, en el REA en el año 2016, en el que realiza un REGEPA de fecha 09/03/2016, informatizado el 30/06/2016; y declara 2,94 Has, de las que: 1,62 Has, son de trigo; y 1,32 Has, de barbecho tradicional.

-La mayoría de las Parcelas que declara, las declaró en años anteriores el cónyuge de la persona solicitante.

-En año **2017**:

-La persona solicitante presenta 2 REGEPAS: i) uno, en fecha 07/03/2017, en el que declara 5,27 Ha, de las que: 3,70 Has son de cebada; 1,07 Has, de barbecho tradicional; 0,43 Has, de trigo; y 0,07 Has, de olivar; y ii) otro, de fecha 29/05/2017, en el que declara 3,97 Has, de las que: 3,08 Has

son de cebada; 0,82 Has, de barbecho tradicional; y 0,07 Has, de olivar.

-La persona interesada declara las Parcelas del año anterior, y las nuevas que declara este año no las declaró nadie en años anteriores.

-Junto a la solicitud de nuevas plantaciones, la persona interesada presentó diversos contratos de arrendamiento: i) en uno de ellos, el arrendador tiene 86 años, figura en el REA desde el año 1999 y con viñedo desde el 2004; y ii) en otro, es arrendador el cónyuge de la persona solicitante, el cual figura en el REA desde el año 1998 y con viñedo desde el 2004, dispone de carné cualificado de aplicador de productos fitosanitarios, su explotación es prioritaria desde el 2016 y cuenta con maquinaria inscrita en el Registro oficial correspondiente (ROMA).

-En año **2018**:

-La persona solicitante, en fecha 03/05/2018 realiza un REGEPA, en el que declara 3,89 Has, de las que: 1,85 Has son de trigo; 1,65 Has, de barbecho tradicional; 0,32 Has, de viñedo; y 0,07 Has, de olivar.

-La persona solicitante declara todas las Parcelas que declaró en el año 2017.

-La persona solicitante, con fecha 30/05/2018, comunica que ha plantado la superficie conferida.

-En año **2019**:

-La persona solicitante realiza 2 REGEPAS de la misma fecha, el 17/04/2019, en las que declara la misma superficie de 11,08 Has, de las que: 6,54 Has son de cebada; 3,52 Has, de barbecho tradicional; 0,66 Has, de olivar; 0,32 Has, de viñedo y 0,04 ha de cabecera de cultivo permanente.

-La persona interesada solicita ayuda por pago básico, pago verde e indemnización compensatoria en zonas de montaña; pero no consta que haya cobrado estas ayudas.

La persona solicitante declara todas las Parcelas que declaró en el año 2017, y de las nuevas que declara este año, en 2018, parte, la declaró uno de los arrendadores.

-Con fecha 17/04/2019, la persona interesada solicita Derechos de pago básico a la Reserva nacional como agricultor que comienza su actividad agraria.

-En año **2020**:

-Con fecha 06/03/2020, la persona solicitante realiza un REGEPA, en el que declara 14,63 Has, de las que: 6,54 Has son de cebada; 4,19 Has, de barbecho tradicional; 1,83 Has, de trigo; 1,00 Has, de pastos permanentes; 0,71 Has, de olivar; 0,34 Has, de viñedo; 0,02 Has, de cabecera de cultivos permanentes; 0,71 Has, de olivar; 0,34 Has, de viñedo; y 0,02 Has, de cabecera de cultivo permanente.

-La persona interesada: i) dispone de carné básico de aplicador de productos fitosanitarios desde 18/12/2018 y cualificado desde 24/01/2019; ii) cuenta con maquinaria inscrita en el ROMA: 1 pulverizador que inscribió el 07/04/2017; iii) no consta dada de alta en la AEAT ni la Seguridad Social; iv) no consta que tenga el Cuaderno de explotación.

B) Por tal motivo, la Resolución de inicio consideraba que la persona interesada no reunía los requisitos precisos para ser considerada como *Jefe de explotación*. Sin embargo, tras las alegaciones y aportación de documentos realizada en su momento a consecuencia de nuestro dictamen anterior sobre este caso, una segunda Propuesta de resolución considera que la persona interesada, aunque quizá pudiera ser reputada *Jefe de explotación*, sin embargo no podía haber sido incluida en el Grupo 1 del procedimiento de nuevas plantaciones de 2016, ya que no reunía el requisito de ser *Joven nuevo viticultor* que la normativa vigente exige para pertenecer a dicho *Grupo 1*.

En efecto, en la declaración de IRPF correspondiente al ejercicio de **2015**, la persona interesada imputa a la venta de “producto 9” unos ingresos de 4.830,20 euros. En el siguiente ejercicio fiscal de **2016**, los ingresos íntegros declarados por el mismo “producto 9” son de 35.196,96 euros; y, por el “producto 6”, son 5.680,86 euros. En el ejercicio **2017**, declara ingresos por el “producto 9” de 19.534,60 euros. En el ejercicio **2018**, los ingresos por el “producto 9” son de 6.474,84 euros y por el “producto 6”, 1.228,95 euros. Los productos 9 y 6, se encuentran contenidos en los índices de rendimiento neto aplicables a los productos o servicios derivados de actividades agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objetiva, correspondiente el producto 6 a *cereales, cítricos, frutos secos, productos hortícolas, patata, leguminosas, uva para vino de mesa sin denominación de origen, productos del olivo, hongos para el consumo humano y tabaco* y el producto 9 a *uva de mesa, una para vino de mesa con denominación de origen, oleaginosas, arroz y flores y plantas ornamentales*.

Ello revela que la persona interesada estaba desarrollando la actividad como viticultora antes del 1 de febrero de 2016, aunque el viñedo no estuviera inscrito a su nombre en el Registro de Viñedo y aunque no aparezca su explotación agraria en el REA hasta la campaña 2016, en la que aparece como titular de 2,0092 Has (de las cuales: 1,62 Has son de trigo blando; y 0,3892 Has, de barbecho tradicional). Según el REA, la primera vez que aparece inscrito viñedo a nombre de la persona interesada es en la campaña de 2018, por una superficie de 0,3447 Has (que se corresponde con el viñedo concedido en el reparto de nuevas plantaciones de 2016, cuya comunicación de plantación se realizó en fecha 30 de mayo de 2018).

B) Cada una de estas circunstancias, aisladamente considerada, tal vez pudiera encontrar una justificación razonable e incluso, como admite la Consejería actuante, quizá pudiera acreditar la condición de la persona interesada como *Jefe de explotación*, que era una, pero no la única, de las condiciones legalmente exigidas para obtener nuevas plantaciones en 2016; sin embargo, a juicio de este Consejo, la concurrencia cumulativa de todas ellas en un mismo supuesto de hecho sólo puede obedecer (sin explicación alternativa lógica posible) al propósito de aparentar, ficticia o artificialmente, la existencia de otra de las condiciones esenciales (*joven nuevo viticultor*) requeridas legalmente para obtener una

autorización para plantar grandes superficies de viñedo por la persona solicitante; cuando ésta, en la realidad material de las cosas, carece de dicho *requisito esencial* para ello, pues no es *joven nuevo viticultor*; ya que, al intentar probar su condición de *Jefe de explotación*, ha probado también que venía ejercitando la viticultura anteriormente, por lo que la persona interesada no podía ser legalmente reputada como *nueva* en esa actividad agraria y, por ello, no podía ser adjudicataria de autorizaciones de nueva plantación en 2016 ya que no cumplía el referido requisito y criterio de prioridad establecido en el nuevo régimen normativo a cuyo amparo aquellas autorizaciones se adjudicaron.

Este efecto es obvio que debe evitarse, pues, conforme al art. 6.4 del Código Civil, “*los actos realizados al amparo del texto de una norma, y que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán realizados en fraude de Ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir*”.

En este caso, además, la imposibilidad, para la persona solicitante, de obtener la puntuación suficiente es absoluta; pues en el expediente ha quedado claramente probado que la referida persona interesada no era *nuevo viticultor* cuando solicitó que se adjudicaran autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo en la campaña de 2016, pues ya venía ostentando dicha condición de viticultor con anterioridad, hasta el punto de haber probado ser *jefe de explotación* vitícola.

Repárese en que, al exigir el requisito de ser *nuevo viticultor*, el legislador está pensando en priorizar a aquellos *jóvenes* agricultores que no cultivaran viñedo a fecha 1 de febrero de 2016; pero, en el presente caso (aunque, cierto es, no constaba la titularidad de viñedo alguno en el Registro de Viñedo), de la información ya indicada, se desprende que la explotación de la persona interesada estaba orientada, desde su inicio, al viñedo; con lo que dicha persona interesada se ha colocado voluntariamente en una situación ventajosa en el procedimiento de reparto del año 2016, al ser clasificada en el *Grupo 1* como *joven viticultor*; y lo ha hecho aparentando reunir los criterios de prioridad mediante la creación ficticia de condiciones artificiales, siendo así que la persona interesada no podía ser considerada como *nuevo viticultor* en el momento en el que presentó su solicitud el 9 de marzo de 2016 y no podía, por tal motivo, haber sido encuadrada dentro del *Grupo 1*.

En fin, como se ha señalado ya, la Resolución de autorización que nos ocupa produce un resultado radicalmente contrario al buscado por las normas a cuyo amparo se dictó, resultado que se concreta en otorgar una autorización para plantar viñedo que se abstrae de una aplicación, correcta y efectiva, de los criterios de prioridad, y que permite, en definitiva, la adquisición de derechos a quien carece de las condiciones, objetivas y subjetivas, que el ordenamiento jurídico ha establecido como esenciales y determinantes para beneficiarse de la autorización a plantar las nuevas superficies cultivables.

En consecuencia, la referida Resolución debe considerarse nula de pleno Derecho, de acuerdo con el art. 47.1.f) LPAC'15.

Tercero

Sobre actuaciones administrativas conexas

1. La Resolución de 31 de julio de 2020, de la Excm. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, por la que se incoa el procedimiento de revisión de oficio que nos ocupa, incluye, entre las actuaciones administrativas cuya revisión se pretende, además de las Resoluciones de fechas 7 de julio de 2016 y 4 de noviembre de 2016, dictadas por el Director General de Desarrollo Rural, las inscripciones en el Registro de Viñedo derivadas de las anteriores Resoluciones.

2. Como ya tenemos reiterado, en cuanto a los asientos practicados en el Registro riojano de viñedos, una hipotética declaración de nulidad de las Resoluciones de 7 de julio de 2016 y 4 de noviembre de 2016, habrá de dar lugar a la cancelación de los asientos que se hayan practicado, en coherencia con lo dispuesto por el art. 14.1 del Decreto 4/2017, de 3 de febrero, a cuyo tenor *“la modificación del Registro de Viñedo se hará por la finalización de los procedimientos administrativos regulados en la normativa de potencial vitícola de los que deriven una modificación de los datos inscribibles en el Registro de viñedo”*. Lo mismo puede decirse del alta de oficio y de la inscripción en el registro del Consejo Regulador, pues su nulidad es lógica consecuencia de la inicial nulidad de la concesión inicial de nuevas plantaciones como de la posterior autorización de plantación.

3. Por último, la Propuesta de resolución inicial también planteó *“declarar como viñedo no inscrito e instar el arranque”* de las superficies plantadas al amparo de la autorización que se pretende declarar nula. Tal decisión compete al titular de la Dirección General correspondiente, a tenor de lo dispuesto en el vigente Decreto 49/2020, de 3 de septiembre, de estructura orgánica de dicha Consejería (que ha derogado el Decreto 41/2019, de 10 de septiembre) No obstante, a tenor de lo establecido en el art. 10.1, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, *“los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente”*; por lo que se puede concluir la competencia de la Excm. Sra. titular de la Consejería actuante para adoptar esa decisión.

CONCLUSIONES

Única

Procede la revisión de las Resoluciones administrativas de 7 de julio de 2016 y 4 de noviembre de 2016 por concurrir en ellas la causa de nulidad de pleno Derecho comprendida en el apartado f) del artículo 47.1-f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas (LPAC'15).

Este es el Dictamen emitido por el Consejo Consultivo de La Rioja que, para su remisión conforme a lo establecido en el artículo 53.1 de su Reglamento, aprobado por Decreto 8/2002, de 24 de enero, expido en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Joaquín Espert y Pérez-Caballero